

Viabilidad de la socialdemocracia. La agenda latinoamericana de hoy y de mañana

Nils Castro

La agenda política latinoamericana ha sido reemplazada por otra en los últimos años. En los sesenta, se hablaba de la revolución, atendiendo a la demanda de grandes cambios sociales liberadores, cuya necesidad no ha disminuido. En los setenta, de la soberanía y la integración, destinadas a recuperar la autodeterminación y solidaridad requeridas para el cambio. En los ochenta, de la democracia, limitada a la prioridad de eliminar las últimas dictaduras militares y consagrar los derechos humanos.

Ahora el discurso no habla del cambio necesario, sino de los "reajustes estructurales" y, con ello, de la competitividad en vez de la solidaridad integradora. El uso establecido de la palabra "democracia" ya no contempla la autodeterminación requerida en los setenta, ni menos el protagonismo popular que se exigía en los sesenta.

Esto no disminuye el mérito de lo alcanzado en años recientes: el estar saliendo de las cavernas de las viejas y nuevas dictaduras, dando carta de naturalidad a los derechos humanos y al pluralismo ideológico, está entre las mejores conquistas del siglo.

Pero ello también viene sirviendo para ocultar que el alcance de nuestras metas ha sido achicado y retrotraído: lo que ahora alcanzamos apenas cumple lo que se procuraba al inicio de los años cincuenta. Con la desventaja de que antes se afirmaba —acertadamente— que las transformaciones sociales y liberadoras son indispensables para autodeterminarse el desarrollo democrático integral, mientras que hoy hemos quedado en unas democracias que se debaten en constante crisis, porque se agotan repitiendo el modelo que fracasó hace treinta años.

En estas circunstancias, no sólo la democracia, sino también la promesa socialdemócrata aparece amenazada de entrar en crisis, cuando se castiga la realización de su programa o se obliga a sus gobiernos a renunciar anticipadamente al mismo.

Toca a los socialdemócratas resignarse a su conversión en neoliberales, o luchar por el rescate de la soberanía y autodeterminación nacionales, recuperando su antigua vocación antimperialista y solidaria —latinoamericanista—, cuyo olvido tanto ha contribuido a allanar la presente situación.

Si examinamos lo sucedido al trasluz de las oportunas pero reiteradamente eludidas advertencias de Martí, de Vasconcelos, de Mariátegui, de Haya de la Torre —entre otros—, veremos que por lo menos una cosa se ha querido que olvidemos: el orgullo latinoamericano, sin el cual falta la independencia política, autodeterminación nacional y solidaridad popular, en ausencia de las cuales la democracia a que aspiramos es sustituida por la manipulación.

El pensamiento socialdemócrata latinoamericano se desarrolló por sí mismo desde fines del siglo XIX hasta pasada la crisis de los años treinta, con independencia del acontecer ideológico europeo. Luego de los años sesenta y en el campo dejado por el reflujo de la revolución, en su actual sentido las ideas socialdemócratas se propagaron por América Latina durante los setenta y los ochenta. Vinieron a ser una propuesta menos sujeta a las persecuciones de la represión, y una solución pluralista frente a los excesos ideológicos, los radicalismos voluntaristas y los sectarismos aislantes que habían dañado al movimiento revolucionario. Un discurso capaz de reagrupar las reivindicaciones de masas y movilizar sectores mayoritarios, y la esperanza de reformas sociales con participación popular, sin autoritarismo ni dictadura. Una propuesta aceptable para amplios grupos sociales, con una expectativa de cooperación policlasista y hasta de bendiciones europeas y de corrientes liberales del *establishment* norteamericano.

América de Baja Intensidad

Ello tuvo el mérito incuestionable de incorporar a

miles y miles de personas al debate y la participación sociopolítica. Quedaba por determinar si su conducción práctica estaría encaminada a organizarlas para asumir metas superiores, o mediatizarlas. A la par, asistimos a un rápido proceso de modernización de la derecha política latinoamericana, a través de la democracia cristiana y fundaciones estadounidenses, que saltaron de la manipulación cruda de las oligarquías y cuarteles a la de partidos e internacionales de renovada dinámica.

Esta nueva propagación del ideario socialdemócrata coincidió con un cambio radical de los objetivos y métodos de la hegemonía de Estados Unidos en la región. Estos ya no se centrarían en la colocación y custodia de capitales, empresas y mercancías, ni se ejercería principalmente a través de los métodos clásicos de contrainsurgencia —cuyo apogeo fue la llamada “guerra sucia”—, sino conforme los postulados por la doctrina de conflicto de baja intensidad, mejor ajustada a los nuevos tiempos.

América Latina fue convertida en tributaria financiera de la potencia hegemónica, y en exportadora neta de capital. Con ello, esa propagación de las ideas socialdemócratas no sólo coincide con el fin del ciclo de las dictaduras militares de la derecha oligárquica, sino también con el agravamiento de la crisis económica latinoamericana, gradualmente acumulada y generalizada por efecto del intercambio desigual y el injusto orden económico y financiero internacional, y repentinamente dramatizada por la deuda externa.

Al cabo de los años ochenta, las ideas socialdemócratas aparecen inmersas en un continente que ya no es el mismo, por cuanto ahora predominan otras formas de explotación y control sobre nuestros países: la explotación financiera, y los nuevos métodos de intervención y sometimiento, más sofisticados, que le corresponden. Tal es el caso de la manipulación de las informaciones y medios de comunicación, la injerencia en los procesos políticos y electorales, y el uso de nuevas formas de coacción política mediante el manejo de los compromisos financieros y de sus agobiantes renegociaciones.

Tales son algunos de los instrumentos con que, desde mediados de los ochenta y con creciente eficacia, la nueva realidad y las necesidades de la hegemonía norteamericana procuran reestructurar sus relaciones con la periferia neocolonial, ya no sólo en el plano financiero sino en el específicamente político.

La deuda externa ahora no es sólo la cara visible de un nuevo sistema de explotación económica de nuestros pueblos, y de subsidio a la supremacía regional de la potencia hegemónica. Ha pasado a ser también un extraordinario instrumento de poder político del gobierno norteamericano para doblegar y someter a las autoridades latinoamericana-

nas e imponerles el diseño de sus políticas interiores, y la liquidación de los proyectos solidarios e integracionistas, a despecho de la institucionalidad democrática existente en los respectivos países.

Los gobiernos democráticamente electos pierden su lealtad a los electores, y a los principios ideológicos y programas anunciados por sus respectivos partidos, tan pronto se sientan a hablar con los banqueros —y aun antes de sentarse—. Lo hacen a nombre de una expectativa de “dinero fresco” (es decir, de deuda nueva) que, sin embargo, no llega o se consume en servir la deuda vieja. En cambio el sometimiento neocolonial y las deslealtades permanecen, y el disgusto social y la desconfianza en el sistema de partidos se incrementan.

No se elige ya a gobiernos soberanos ni autode-terminados, sujetos a los objetivos nacionales ni a la soberanía popular. Se eligen administraciones de la deuda y se “premia” su docilidad. El pueblo vota por una cosa y obtiene la contraria. Vota por un gobierno, elige un parlamento, pero la política económica y de desarrollo nacional es determinada en Washington y Nueva York, de acuerdo con pautas ajenas a la Constitución de cada República latinoamericana y opuesta al interés nacional y popular de los respectivos países.

Reajuste y crisis de la democracia

Así, dando por válida cualquier elección donde el escrutinio pase por ser escrupuloso, sin considerar su contenido político real y concreto, lejos de ir hacia una democratización verdadera asistimos a un enorme proceso de puertorriqueñización, por el cual nadie ha votado. Claro ejemplo fue el aviso del presidente George Bush dos días antes de las elecciones argentinas: aclaró que Estados Unidos reconocerá la victoria de cualquiera de ambos candidatos principales, pero señaló que quienquiera fuese deberá acometer “reajustes estructurales” adicionales. Aunque los argentinos aún no habrían concurrido a las urnas, ya Bush —amén de erigirse en pontífice electoral— estaba gobernando por ellos.

Paradójicamente, cuando tanto se habla de la clase de democracia que debemos tener, también se quiere implantar aquí el modelo de desarrollo con el que sólo férreas dictaduras asiáticas han alcanzado éxito.

La historia de los “reajustes estructurales” viene de la década anterior. En los sesenta, en varios países fueron impuestos mediante el terror militar y la “guerra sucia”. En los ochenta, ha tocado a las nuevas democracias administrar la situación ya creada (y continuarla) o, de lo contrario, les toca introducirla bajo la compulsión de la deuda y sus renegociaciones. Democracias con deuda, en realidad democracias de la deuda. Democracias restringidas o “viables”, siempre en jaque, limitadas

al campo en que son consentidas o toleradas: administrar la deuda, la restructuración económica y el empobrecimiento, y asumir política y moralmente las responsabilidades por el rechazo social que necesariamente conllevan.

Ello ha establecido un cuadro crítico en el que las esperanzas y las realidades marchan tan mal que ya ni los militares aceptan hacerse cargo de gobernar. De hecho, en esos mismos países ellos ya dejaron cumplido su papel: los "reajustes" están encaminados, la deuda fue contraída y la izquierda política quedó descabezada o neutralizada. Ahora el ejército se limita a ejecutar con dureza, pero sin responsabilidad política ni penal, las represiones masivas que le ordena el poder civil *democráticamente electo*, en vez de las que antes mandaban los gobiernos *de facto*, por medio de los cuales previamente se impuso el proyecto transnacional de la oligarquía financiera civil.

Por consiguiente, es falso que la deuda pone en crisis a la democracia. Esta clase de democracia proviene de esa crisis y expresa el proceso de restructuración de las relaciones neocoloniales de Estados Unidos. Antes bien, el ejercicio de una democracia real y participativa —leal a sus electores y promesas—, pondría en crisis al pago de la deuda, y los objetivos de la restructuración. Es por ello que son los acreedores, la potencia hegemónica, sus aliados y voceros, quienes primero se interesan en encomiar esta clase de democracia formal y mediatizada, y en impedir que la voluntad popular despliegue todas sus pontencialidades.

Nadie pone en duda las ventajas de los nuevos regímenes latinoamericanos a la luz de los derechos, humanos y cívicos (abstracción hecha de ciertas represiones recientes). Sin embargo, con ocultar sus graves y crecientes limitaciones neocoloniales e impopulares tampoco se le hace favor a la democracia. Ningún "buen arreglo" con Estados Unidos y los banqueros justifica una mala política frente a nuestros propios pueblos. Con blandir la amenaza del real o supuesto retorno a las dictaduras, la defensa acrítica de esta democracia sirve al propósito de doblegarse ante la nueva hegemonía neocolonial e impopular y, lo que es más grave, de disuadir de la lucha por la liberación nacional y la democratización real y participativa, que antes fueron prioridades socialdemócratas.

El buen deseo de institucionalizar la democracia nunca justifica marginar la lucha por la justicia social, la independencia, la autodeterminación y la equidad. Para condenar las dictaduras hace falta proponer un mejor proyecto de democracia. Para hacerlo, la socialdemocracia deberá decidir si su papel en América Latina es el de continuar justificando —y hasta cumpliendo desde el

gobierno— una política complaciente con los intereses hegemónicos, con los dictados del neoliberalismo, la explotación financiera, la pérdida de la soberanía nacional y de solidaridad latinoamericana, o el de luchar real y fehacientemente por formas más plenas y concretas de independencia política, autodeterminación popular, y democratización integral y participativa. De lo contrario, se hace imposible discernir entre la socialdemocracia y el liberalismo o el populismo, como ya sucede.

Estados Unidos ha perfeccionado y prodiga una nueva concepción y tecnología políticas de injerencia, control e intervención en los procesos sociopolíticos y electorales, que en algunos países del área llega hasta la agresión económica y la amenaza militar. No es ésta la realidad que perciben ni desean percibir los socialdemócratas europeos, quienes tienen otras prioridades —justificables en el ámbito que a ellos corresponden—, y ante quienes Washington observa otra conducta, puesto que allá debe procurar otros objetivos. Pero ésta sí es la realidad vivida y padecida por los latinoamericanos.

El remplazo de las dictaduras fue y es aplaudido por todos nosotros; pero este aplauso no puede congelarse en un estancamiento conformista, ni menos en la condenada a permanecer avalado lo que se ha instaurado en lugar de aquellos regímenes, y que ahora quiere reproducirse, en nombre de las nuevas necesidades norteamericanas, que no son las nuestras.

No se oculte, interesada ni ingenuamente, el hecho de que en Uruguay se eligió a Sanguinetti guardando en la cárcel a Wilson Ferreira y a Serregni; que en Brasil se eligió gobierno por una corporación mayoritariamente consuitada por excolaboradores de la dictadura; que en Argentina se eligió a Alfonsín bajo amenaza militar contra el pueblo; que en Colombia se vota bajo reglas sumamente restrictivas e impunidad de las bandas paramilitares; que en Venezuela sólo pueden aspirar candidaturas multimillonarias y demagógicas; que México ha vivido los cómputos más controvertidos de su historia. El colmo lo constituye que se hayan dado por "buenas" las elecciones terroristas celebradas en Guatemala, Haití y El Salvador, las corruptas celebradas bajo ocupación extranjera en Honduras, o las dudosamente dirigidas a legitimar a un traficante stroessnerista en Paraguay, siempre bajo el pretexto de que se trata de procesos de "transición".

Todas reconocidas como "legítimas", han sido en cualquier caso elecciones estructuradas para dar oportunidad real sólo a opciones cuyos resultados son "aceptables" para la potencia hegemónica. Es decir, quedan gobiernos que de uno u otro modo luego han de avenirse al nuevo ordenamiento estadounidense de la dominación finan-

ciera y política regional así como a la tarea de hacerlo aceptar por sus respectivos pueblos, aun a costa de disparar un nuevo ciclo de descontento y represiones. También por ello, gobiernos que junto al norteamericano se constituyen en celosos defensores de los "principios" democráticos (de la democracia restringida) que permitieron su elección y pueden posibilitar su reproducción.

Más allá del mal menor

Sin embargo, nadie debe llamarse ni llamar a engaño. Se trata de elecciones en las que los ciudadanos generalmente se han visto constreñidos a escoger el menor entre dos males, y no la mejor entre varias esperanzas. En la mayoría de los casos no ha habido más voto real o popular que el voto de castigo, que no es expresión de una preferencia sino de un repudio. No construye un futuro más democrático sino que rechaza un presente insatisfactorio. El ciudadano que poco después protestará contra el gobierno que eligió rechaza haberle otorgado la legitimidad que el elegido pretende.

Hemos aceptado tales procesos electorales en contraste con las dictaduras que les precedieron, y en la confianza de que efectivamente se trate de transiciones hacia mejores formas de democracia. Transcurridos ya algunos años, cabe dudar que efectivamente lo son. Hasta ahora, ese supuesto ha sido apenas una esperanza, difícil de sostener en tanto que no sólo la economía y la calidad de la vida, sino también la soberanía de los países y la integración latinoamericana han retrocedido por lo menos 25 años.

Pero, en la práctica, hemos aceptado como "bueno" y hasta "suficiente" para nosotros algo que corresponde a lo que la política reestructuradora de Washington necesitaba y quería. Administraciones civiles de la deuda, democracias restringidas y en permanente crisis, que no se plantean los cambios necesarios y, por consiguiente, tampoco satisfacen las expectativas de democratización integral y autodeterminada exigidas por nuestros pueblos en bien de su propio desarrollo.

Entre tanto, los costos, los pagamos nosotros (y la fiabilidad del concepto de democracia), en tanto no sólo nos han convertido en países tributarios que exportan capital hacia economías más poderosas, sino que entramos en una nueva disyuntiva entre ingobernabilidad o represión. Ya ni los viejos ni los nuevos gobiernos gozan de confianza, ni sus mecanismos deparan esperanzas para el próximo periodo. La crisis generalizada del intercambio desigual, y la crisis de la deuda externa, se han convertido en crisis de todo el sistema y de cada una de sus instituciones.

Particularmente, amenaza convertirse en crisis del sistema de partidos políticos, y de los propios partidos. Estos ya no modelan el proceso político hacia el cumplimiento del respectivo programa, ni organizan y movilizan una masa social en función de los objetivos de dicho programa. Tienden a ser sólo máquinas electorales que intervienen en la sucesión gubernamental sin aspirar al cumplimiento de las promesas ni objetivos programáticos, que antes se alegaban como su razón de ser y de convocar.

Pasado el instante electoral los estallidos sociales se suceden dolorosa y crecientemente en República Dominicana, en varias ciudades brasileñas, en toda Venezuela, en Argentina, sin que los partidos sean ya entidades capaces de controlarlos, contenerlos ni encauzarlos, porque han dejado de ser eficaces para dirigir políticamente a la población. Así como en Venezuela, a nombre de la social democracia se promete una cosa para ser electos, luego se hace la contraria desde el gobierno para satisfacer los requerimientos reestructuradores de la hegemonía extranjera, y al final ya no se apela al partido electoral para orientar al pueblo, sino al ejército para someterlo. Y nadie recuerda si aún existe un programa y una ideología del partido, porque ya carece de sentido recordarlo.

Con ello, los sectores sociales concretos cada vez apelan más a otras formas de organización para expresar sus demandas y reivindicaciones políticas (y no meramente electorales), que dejan de encontrar cauce a través de los partidos. Toda clase de gremios, asociaciones vecinales, agrupaciones del sector socioeconómico "informal", organismos cívicos y religiosos, y organizaciones armadas, asumen el protagonismo político alternativo, actuando con creciente eficacia por fuera del sistema establecido, ya que sus necesidades y aspiraciones carecen de expectativas por medio del procedimiento partidista y electoral así perversido.

Manejo y frustración electorales

La determinación y los métodos de la nueva hegemonía político-financiera norteamericana para estructurar y defender sus propósitos se transparentan en las experiencias electorales de Nicaragua y Panamá. Ambos casos son aleccionadores, porque revelan lo que probablemente será uno de los principales recursos de intervención y control que se espera aplicar sobre los demás países latinoamericanos durante la década venidera, al tenor de la metodología política denominada "doctrina de conflicto de baja intensidad".

En ambos casos, el propósito inicial perseguido tenazmente por Washington fue el de evitar la celebración de unas elecciones que previsiblemente

tendrán resultados adversos a los fines norteamericanos. En su lugar, se procuraba, derribar y sustituir a los respectivos gobiernos por otros medios. Pagando, entrenando y sosteniendo un ejército de irregulares con la complicidad de países vecinos en el caso de Nicaragua, y promoviendo, pagando y sosteniendo un proceso de desestabilización social y penetración de las fuerzas armadas en el caso de Panamá (según los modelos antes experimentados en Chile y Filipinas).

Más tarde, ante la inevitabilidad de las elecciones nicaragüenses y de la victoria sandinista, se optó por deslegitimizarlas, para desconocer sus resultados, forzando a la abstención de los partidos opositores. El objetivo dejó de lograrse, y el fracaso de esa maniobra hizo reconsiderar su táctica al acercarse las elecciones en Panamá. En su lugar, se hizo participar a la oposición dentro de un proyecto encaminado a forzar los resultados en su favor, o hacer abortar el proceso electoral para volver a la justificación de otros medios.

En ambos países el proceso debió realizarse en condiciones totalmente anormales. Uno y otro debieron ir a las elecciones tras prolongada agresión económica, desinformativa y política norteamericana, con cuantiosos perjuicios a las respectivas economías nacionales, y las consiguientes secuelas de daños sociales. En Nicaragua, bajo ataque militar de la contra; en Panamá bajo amenaza de intervención militar estadounidense. Lo uno y lo otro, para lograr una rendición del electorado, ya que se había fracasado en hacer capitular al gobierno.

Lo sucedido en Panamá fue el resultado del aprendizaje norteamericano adquirido en Nicaragua. Lo que después fue experimentado en Panamá es lo que ahora se prepara para aplicar sobre las próximas elecciones nicaragüenses. Uno y otro caso constituyen una reproducción perfeccionada de los métodos y técnicas de injerencia y desestabilización mucho antes practicados en Chile y, obviamente, un pronóstico de lo que en años venideros podrá observarse en otras latitudes del continente.

Aparte de la campaña política y desinformativa previa, y de la cuantiosa agresión económica, antes destinadas a derribar el gobierno e instalar un régimen de facto, Washington gastó en la campaña electoral panameña poco más de 110 millones de dólares. Parte en subsidiar y reflotar los partidos de la derecha pronorteamericana, parte en costosos dispositivos para intervenir directamente en el desarrollo del proceso electoral y parte para poner en entredicho la legitimidad del mismo proceso, e invalidar o reconocer sus resultados según a quién beneficiasen.

Para una población de apenas un millón de electores, se invirtieron no menos de 10 millones de dólares en compra de votos y corrupción de jurados y funcionarios electorales. El presidente Bush ad-

mite haber ordenado entregar otros 10 millones a la oposición por conducto de la CIA. En efecto, pese a la crisis anticipadamente provocada por la prolongada agresión económica norteamericana, durante la jornada electoral el comercio y el fisco registraron el abundante excedente monetario así generado en todo el país.

Por si fuera poco, el mismo presidente Bush anunció oficialmente que las elecciones sólo se considerarían legítimas de darse el triunfo a su oposición, y que, en caso contrario, Estados Unidos consideraría una intervención militar contra Panamá. Para demostrarlo, hizo instalar un tribunal electoral paralelo, con funcionarios estadounidenses, en una de las bases militares norteamericanas en Panamá, y ordenó el traslado de tropas adicionales hacia ese país. Con todo, fracasó en el empeño de darle su ganador a las elecciones. Una vez que los cómputos empezaron a arrojar resultados adversos a su propósito, la oposición procedió al secuestro de actas electorales y la provocación de disturbios que —antecedidos de una masiva y adversa campaña de prensa— acabaron por determinar la anulación del evento, ya de por sí distorsionado por todo lo anterior.

Vale recordar que, aunque la publicidad estadounidense tilda de dictatorial al gobierno panameño, tras dos años de intensa desestabilización del país no ha habido ni una sola víctima mortal que cualquier grupo político pueda reivindicar. Ello contrasta dramáticamente con lo que puede señalarse a los demás gobiernos tenidos por democráticos en este continente.

Paralelamente, y en forma que recuerda con claridad el modo en que se inició la desestabilización de Panamá, uno de los principales bancos norteamericanos "congeló" más de 80 millones de dólares al gobierno socialdemócrata del Ecuador. Enseguida, empezaron a detonarse acciones de desobediencia civil en este país, forzándolo a la disyuntiva entre capitular de su programa o reprimir a su pueblo.

Esto repite la escala de "castigos" que antes se aplicó al gobierno socialdemócrata del Perú, luego de su rebeldía frente a los mismos acreedores internacionales, hasta el extremo de llevar a la desesperación y la violencia a la economía y la sociedad peruanas, para entronizar enseguida una opción electoral de la derecha pronorteamericana. Las próximas elecciones peruanas ya son, probablemente, el campo donde más pronto y gravemente tienen aplicación las técnicas prelectorales y electorales injerencistas experimentadas en Nicaragua y Panamá.

Unos y otros de estos casos demuestran a las claras que el proceso democratizador está no sólo mediatizado, sino en grave peligro, en tanto sus instrumentos electorales se ven sometidos a la injerencia externa, además de la coalición políti-

co-financiera que se aplica a los gobiernos, y de la subversión que se provoca en los pueblos.

De regreso a la OEA

En otro plano, a lo anterior se agrega el recelo y división que la misma política provoca entre las naciones latinoamericanas, contrariando la alternativa de la colaboración y la complementación.

Porque el neoliberalismo y la coacción político-financiera, en cuanto expresión de las nuevas necesidades estructurales de la hegemonía norteamericana, son esencialmente insolidarios. Mediante los condicionamientos que imponen a cada país dentro de la negociación por separado de la deuda, fomentan rivalidades entre ellos y promueven la competitividad en lugar de los procesos de integración. Este obstinado esfuerzo quiere liquidar los ideales bolivarianos que siempre han sostenido al liberalismo. Pero, más concretamente, impide desarrollar la más viable de las opciones latinoamericanas para superar la crisis.

Prueba de ese insolidarismo lo fue la involución del Grupo de Contadora, del Consejo de Cartagena, y del Grupo de Río (antes de Ocho), iniciados con singular espíritu latinoamericanista en las condiciones iniciales de la década de los ochenta, y luego frustrados por los cambios que después se acumularon en el transcurso de la misma, a medida que fue conformándose y haciéndose sentir la nueva política estadounidense. Para entenderlo, ha de recordarse que sus fundadores representaban gobiernos electos antes de que Estados Unidos desplegara el proceso de reestructuración de las relaciones con su periferia neocolonial.

La iniciativa de Contadora, empezada con autonomía solidaria y respaldo mundial, se vio frustrada, más que por los meandros y demoras creados por las maniobras de las tres cancillerías centroamericanas controladas por Estados Unidos, por la sucesiva quiebra financiera de los miembros del grupo, que debilitó drásticamente su independencia y autoridad. Su gestión se vio paralizada precisamente cuando mayor madurez había adquirido el proceso negociador y, por consiguiente, cuando la perspectiva de distensión y desarme ponía en mayor predicamento la hegemonía estadounidense.

Con todo, lo que principalmente se liquidó en Contadora fue el mal precedente de una iniciativa latinoamericana que se desarrolló con independencia —e incluso en desafío— de la voluntad norteamericana.

En el ínterin, el Consenso de Cartagena reunió a los doce mayores deudores latinoamericanos y, pese a la heterogeneidad del grupo, logró al menos establecer una plataforma de conjunto para caracterizar el problema y los criterios conducentes a una estrategia solidaria de solución, debidamente situada en el plano político. Las tesis allí acorda-

das mantienen extraordinaria vigencia. Con todo, la técnica romana de dividir en negociaciones bilaterales separadas, impuso el debilitamiento de la iniciativa y de sus miembros mediante su dispersión.

El Grupo de Río, en un postrer gesto de autonomía, se fundó con la intención medular de superar la heterogeneidad política que dificultó las labores de Cartagena, para llevar más allá el esfuerzo de negociar en común frente a Estados Unidos y los acreedores internacionales, y de desarrollar el proyecto integracionista como opción autónoma y más eficaz de los latinoamericanos. En la primera cita de cancilleres, el grupo aún sostuvo y generalizó el aliento latinoamericanista inicial de Contadora y su Grupo de Apoyo, y la confianza de lograr una perspectiva de autodeterminación que diese mayores alcances a la democracia.

Sin embargo, ninguneado por Estados Unidos, y agobiado cada uno de los ocho miembros originales por su respectiva crisis y renegociaciones individuales, el grupo tuvo escaso vuelo en su primera reunión de presidentes, efectuada cuando ya comenzaba el recambio de los gobiernos representados en el mismo. Empezó a esfumarse su agenda original: el tratamiento conjunto de la deuda externa, y los conflictos centroamericanos, quedaron en alusiones retóricas. Enseguida, inició su frustración al “suspender” la membresía del primero de sus integrantes que sostuvo una confrontación seria con la hegemonía estadounidense, Panamá. Aduciendo razones de democracia formal, evitó el percance de compartir solidariamente ese reto en defensa de las soberanías latinoamericanas, y eludió contribuir a solucionar el primer problema de autodeterminación que lo correspondió. Con ello, el “caso panameño dejó de complicar las renegociaciones financieras padecidas por la mayoría de los otros siete miembros.

Significativamente, el drama panameño pasó a ser objeto de la OEA, como en los viejos tiempos. Luego de haber reivindicado en Contadora y en Río un derecho y una voluntad latinoamericanos de darse un camino autodeterminador y solidario de desarrollo y democratización, nuestros cancilleres han retomado a Washington. Estados Unidos intenta veitnamizar su problema panameño, y hacer con manos latinoamericanas la operación sucia que la administración Reagan no pudo cumplir por sí sola.

No obstante, en su nerviosa y todavía insegura defensa de los principios fundamentales de no-intervención, de no-injerencia en los asuntos internos de los demás Estados y autodeterminación, los cancilleres dejan traslucir un reconocimiento de que en manos de la resistencia panameña y nicaragüense está la suerte de la soberanía de cada uno de los demás países presentes —la que sus respectivos gobiernos no siempre han tenido firmeza en defen-

der— y que, para salvarla, América Latina necesita una derrota de Estados Unidos en Panamá y en Nicaragua.

Nuevos tiempos, su agenda propia

Recapitulemos. Esta involución, sufrida entre los inicios y finales de la década de los ochenta, está directamente relacionada, en cada país, con el correspondiente deterioro del movimiento de partidos políticos como expresión del movimiento liberador latinoamericano y del correspondiente concepto de democracia. Luego de que la deuda generó su propia democracia, y de que la misma deuda la mantiene en crisis, tanto el sistema político establecido como el deseado, vienen siendo sobrepasados por los hechos.

Las poblaciones protagonizan sublevaciones incontroladas y desorientadas, dejando centenares y miles de víctimas mortales y daños materiales: en Santo Domingo (donde la represión fue avalada por el más conocido partido socialdemócrata), en ciudades brasileñas, en Venezuela (donde la represión ha sido ordenada por el nuevo gobierno socialdemócrata), en Argentina. Mientras los partidos se desideologizan y se desprograman limitándose a tareas del juego y las concesiones electorales —y mientras electores y elegidos se divorcian enseguida de cada elección—, surgen por todas partes formas inéditas de organización espontánea, que ocupan los roles que antes pertenecieron a los partidos, para levantar las reivindicaciones populares, antimperialistas y democráticas que otros han desoído o abandonado.

Para los pueblos, la agenda del cambio necesario ha vuelto a ser prioritaria. Lo escasamente logrado en dos décadas es poco, y lo retrocedido es demasiado. Pero la realización de lo que ahora se reclama con creciente apremio exige romper la estructura hegemónica y la acumulación de concesiones que lo impiden.

Es necesario comprender que ya no vivimos las amargas postrimerías de la década de los ochenta, sino los comienzos de otro periodo. No sólo de una restructuración de las relaciones neocoloniales —que el imperialismo tiene crecientes dificultades en instrumentar—, sino el de una renovada resistencia e iniciativa de los pueblos latinoamericanos, que impondrán formas superiores de soberanía, solidaridad y democracia. La necesidad de una agenda nueva viene de que han empezado otros tiempos, en los que aún países chicos son capaces de defender sus propios proyectos de autodeterminación y dignidad, y donde ya pueblos grandes anuncian mayores estremecimientos.

Porque necesitamos y queremos que el grado de democracia ya alcanzado si sea una transición hacia otra cosa mejor, los partidos y los postulados que la impulsan requieren urgentes transformacio-

nes. Para que la democracia pueda ser, y para que el pueblo pueda ser recuperado por los partidos, hay que rehacer la agenda política y encabezarla con otros motivos de lucha y objetivos. De lo contrario, dejarán de tener sentido y existencia real el sistema de partidos, la propuesta socialdemócrata y hasta sus organizaciones partidarias.

Hay, en realidad, que producir otra agenda —cuyos fundamentos históricos existen hace mucho—, porque no son los modelos importados ni de democracia, ni del socialismo, los que podrán ser consecuentes consigo mismos y tomar cuerpo y liderazgo en nuestra América. La agenda que resuelva la continuidad histórica del nacionalismo revolucionario mexicano, del yrigoyenismo argentino, del mariateguismo y de los fundadores del aprismo, del tenientismo y el trabalhismo brasileños del pensamiento nacional-popular, revolucionario, latinoamericanista y antimperialista que, desde fines del siglo pasado, hizo —al tenor de nuestra historia y realidades— su propia crítica del anarquismo, la socialdemocracia y el estalinismo europeos, y que desarrolló nuestro ideario político avanzado aún antes de cuando Europa sucumbió al fascismo.

La liberación hace la democracia

Esta nueva agenda socialdemócrata de los latinoamericanos, exige no apenas declarar, sino demostrar en los hechos, por lo menos las siguientes condiciones: rechazar la extorsión de nuestros países por la deuda externa, como forma más devastadora e injusta que ella es de la explotación de los pueblos y de los hombres; rechazar el uso de la deuda como medio de chantaje y coacción política, y de imposición de conductas y abstenciones políticas; rechazar la amenaza y el chantaje de que sobrevendrán “alternativas aún peores”, con los que se insiste en hacernos “posponer” nuestros principios liberacionistas; rechazar la injerencia extranjera en nuestros procesos políticos; recuperar efectivamente la soberanía y autodeterminación de nuestras naciones y pueblos.

La lucha concreta, enérgica y diaria por el pleno rescate de la soberanía y la autodeterminación es la piedra de toque de todo proyecto socialdemócrata honesto y verdadero en el Tercer Mundo y, particularmente, en esta América Latina neocolonizada, coaccionada e intervenida. Porque en una realidad como esta, el pensamiento socialdemócrata sólo toma sustancia real cuando se constituye en ideario de movimientos de liberación nacional y, por tanto, cuando vive como pensamiento antimperialista.

Porque en una historia como esta, no cabe ya confiar en “la democracia” en general, abstracta, formal y complaciente, que tanto sirve para encubrir concesiones entreguistas, conformismos y retrocesos en los que hay mucho más de liberal que

de socialdemócrata. La democracia debe ser tangible, ni neocolonial ni abstracta, sino participativa y prioritaria, y la revocatoria de mandatos.

Porque nuestra democracia sólo puede ser real y confiable si sirve a la misión de realizar los cambios necesarios. Ello exige la prioridad de acometer las transformaciones que materializan el programa de descolonización y democratización integral de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, que es lo que interesa a la inmensa mayoría popular, hoy manipulada y frustrada como masa electoral, e irrespetada como protagonista de nuestra historia...

Donde, para cumplir un proyecto democratizador, integral es preciso dar respuesta a una situación neocolonial, la agenda social demócrata tiene que cumplir el requisito de ser una agenda de liberación nacional. Ello sólo es posible si es una agenda antimperialista. Sólo así puede tomar cuerpo factible y creíble como proyecto socialdemócrata. Cuando esto falta, el discurso socialdemócrata apenas encubre un proyecto demagógico de seducción electoral, que hoy por hoy los hechos y las protestas desenmascaran con prontitud.

Esta es la realidad encarnada en América Latina, una realidad cada vez más descarnada, obligante e implacable. La socialdemocracia no puede darse por satisfecha con sus pasadas contribuciones a la solución del viejo problema colonial. Ello sería hacer de avestruz frente a la insoslayable cuestión del neocolonialismo —factor básico en la vida política latinoamericana y en nuestra lucha por la verdadera democracia—. La cuestión del antimperialismo es un tema histórico y principista, hoy desterrado de la agenda socialdemócrata. En Europa ello puede ser signo de la evolución de los tiempos; en América, resulta síntoma de claudicante complicidad (que la potencia hegemónica poco agradece), y de oportunista desinterés por un proyecto más auténticamente democrático —con abandono del ideario y el programa socialde-

mócratas—, cuando ello sirve para ganar y retener posiciones burocráticas.

En una decisión paradójica que hará historia, en junio de 1989, en Kingston, el Comité de la Internacional Socialista para América Latina determinó "separar" de su seno al partido socialdemócrata fundado por Omar Torrijos. Tal vez se repitieron algunos de los condicionantes por los cuales el Grupo de Río le antecedió: los proponentes salvaron sus expectativas ante la nueva administración republicana de Estados Unidos. Pero lo más significativo no es eso, sino el hecho de que el Comité sometió el futuro de su decisión a lo que concluya la OEA sobre Panamá. Entre quienes lo hicieron hubo algunos que hace 29 años condenaron la intervención de la OEA en República Dominicana, e incluso alguno que en su tiempo la combatió. Sintomáticamente, unos y otros descuidaron ahora el prestigio de la Internacional frente a los antimperialistas latinoamericanos y caribeños.

En su época, la Segunda Internacional europea hizo crisis alrededor del tema del imperialismo y de la liberación de los pueblos amenazados u oprimidos. Quienes hoy la continúan podrían asistir a la repetición de un escenario similar en nuestro continente. En América Latina los partidos de esa orientación ya se encuentran divididos de hecho entre dos vertientes, y diversos partidos socialistas o afines se abstienen de sumarse a la Internacional por ese motivo.

Pero, lo que es más significativo, en una y otras latitudes del Continente los partidos socialdemócratas que han renunciado al antimperialismo no sólo se van plegando al programa neoliberal sino que están haciendo crisis como tales socialdemócratas, e incluso como tales partidos.

De acuerdo con la historia y realidad latinoamericanas, sólo quienes son antimperialistas podrán edificar la democracia y cumplir el programa socialdemócrata.

15 de junio de 1989